

**JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (pp. 1-9)**

—

**JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A LA COMUNITAT VALENCIANA (pp. 10-18)**

MARTA OLLER RUBERT

*Profesora contratada doctora de Derecho Administrativo / Professora contractada  
doctora de Dret Administratiu*

*Universitat Jaume I*

**Sumario:** 1. Prevalencia del interés ambiental en la adopción de medidas cautelares: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 553/2014, de 22 de octubre, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7628/2014, de 7 de noviembre. 2. Contaminación acústica: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9657/2014, de 26 de noviembre. 3. Declaración de impacto ambiental: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9545/2014, de 13 de noviembre, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9568/2014, de 20 de noviembre. 4. Disponibilidad de recursos hídricos: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9593/2014, de 21 de noviembre.

Seguidamente se exponen las sentencias más relevantes dictadas por el Tribunal Superior de Justicia por orden cronológico, además de señalarse la temática tratada.

**1. Prevalencia del interés ambiental en la adopción de medidas cautelares: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7553/2014, de 22 de octubre, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7628/2014, de 7 de noviembre**

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7553/2014, de 22 de octubre, el objeto de recurso de apelación es el Auto de 13 de mayo de 2013 dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Elche, en la pieza de medidas cautelares del recurso contencioso-administrativo ordinario número 28/2013 seguido ante ese juzgado, por el que se denegaba la adopción de medida cautelar de suspensión de ejecución del acto administrativo impugnado, que era la Resolución de la Alcaldía del Ayuntamiento de Crevillent, desestimatoria del recurso de reposición interpuesto por esa mercantil contra la Resolución de la Alcaldía que ordenó, en el expediente 1-81/2012, la restauración de la legalidad urbanística vulnerada, con demolición de las obras ilegalmente ejecutadas.

Destaca el Tribunal que las medidas cautelares pretenden principalmente salvaguardar que la futura sentencia pueda ser cumplida y que su pronunciamiento tenga un efecto útil, soslayando que se produzcan situaciones irreversibles durante el tiempo que transcurra hasta que recaiga un pronunciamiento judicial firme. Siendo necesario para adoptar la decisión cautelar la ponderación del interés público que demanda la ejecución, valorándose los intereses en juego, tanto los intereses públicos como los de carácter privado, así como el contraste entre los diversos intereses públicos existentes.

La peculiaridad de este caso es que normalmente la demolición se ha venido presentando como un daño de difícil reparación; sin embargo, el Tribunal considera, en

una línea garantista con la preservación del medio ambiente, que “la ejecución de la aludida orden de restauración no hace perder su finalidad legítima al recurso contencioso administrativo en caso de estimarse el mismo, pues no imposibilita el cumplimiento de la sentencia en sus propios términos con merma del principio de identidad, porque, como en un supuesto similar tiene declarado la STS 3ª, Sección 5ª, de 22 de julio de 2008 —recurso de casación número 270/2007—, ‘Llevada a cabo la demolición, no cabe duda que, de prosperar la acción ejercitada por el recurrente en sede jurisdiccional, resultaría irrecuperable la misma edificación pero no otra de iguales características’. Ha de tenerse presente en este punto, asimismo, que según se dice expresamente por la parte apelante, en la nave en cuestión no se ejerce ninguna actividad que tenga que cesar a consecuencia de dicha demolición”.

Asimismo, se aduce otro argumento para sostener la denegación de la medida cautelar y es que, como hemos señalado, es precisa la “valoración circunstanciada de los intereses en conflicto”. Es obvio que en este caso la ubicación de la construcción ilegal en suelo no urbanizable protegido, en concreto en suelo clasificado por el vigente Plan General de Crevillent como suelo no urbanizable protegido del Sistema de Zonas Húmedas del Sur de Alicante, determina que, frente a los intereses particulares de la recurrente, haya de prevalecer el interés general, consistente en la protección de ese suelo, cuya protección se encuentra vinculada a la protección del medio ambiente. Sobre la base de lo anterior, el Tribunal desestima el recurso de apelación presentado.

En este caso, la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 7628/2014, de 7 de noviembre, resuelve el recurso de apelación contra el Auto número 352/2013, dictado con fecha 26 de noviembre de 2013 por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Castellón, en pieza separada de medidas cautelares dimanante del recurso contencioso-administrativo número 294/2013, por el que se deniega a los recurrentes la medida cautelar solicitada.

Inicialmente, los recurrentes habían interpuesto recurso contencioso-administrativo contra la Resolución de la Conselleria por la que se les denegaba la autorización ambiental integrada para la realización de una actividad amparada en la Ley de Minas, solicitándose, además, en Otrosí como medida cautelar la suspensión de la ejecución de los actos recurridos, esto es, que se pudiera seguir realizando dicha actividad en tanto se resolvía el recurso, y para ello, de acuerdo con la teoría general de las medidas cautelares, pasaban a exponer los siguientes motivos:

- 1) Concurrencia de la apariencia de buen derecho, fundamentada la misma en que los expedientes se habían tramitado sin haber seguido el procedimiento legalmente establecido, y también señalando la falta de motivación de la Resolución.
- 2) Pérdida de la finalidad legítima del recurso, causándose perjuicios de imposible reparación.
- 3) Que la suspensión no supondría perjuicios para el interés público y que la actividad ha favorecido la diversidad del ecosistema del humedal.

El juzgador, ante las alegaciones anteriores, desestima la adopción de medidas cautelares sobre la base de lo siguiente:

- 1) No se especifican ni se acreditan los posibles perjuicios de difícil reparación.
- 2) En segundo lugar, poniendo de manifiesto la necesidad de priorizar la protección ambiental, entiende el Tribunal que con “la resolución administrativa objeto de autos se pretende proteger un interés público evidente, como es el medio ambiente, haciéndose mención expresa en la resolución recurrida que la actividad extractiva en el Prat de Cabanes-Torreblanca puede tener efectos perjudiciales sobre los valores protegidos por el DIO, el acuerdo ZEPA, el Parque Natural y el humedal y se vulneraría la normativa de protección ambiental”.

En relación con la “apariencia de buen derecho”, sigue el Tribunal la línea jurisprudencial más reciente, que supone una aplicación estricta de esa doctrina, utilizándola en los siguientes supuestos tasados: nulidad de pleno derecho, siempre que sea manifiesta; actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula; existencia de una sentencia que anula el acto en una instancia anterior aunque no sea firme; y existencia de un criterio reiterado de la jurisprudencia frente al que la Administración opone una resistencia contumaz.

Sobre el perjuicio que se causa a los recurrentes, de difícil reparación, destaca el Tribunal su naturaleza económica en todo caso, que conlleva que, salvo supuestos excepcionales, no sea motivo suficiente para otorgar la medida cautelar y más aún cuando con ella se pretende una protección del medio natural.

## **2. Contaminación acústica: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9657/2014, de 26 de noviembre**

Estamos en este caso en un supuesto de procedimiento especial para la protección de los derechos fundamentales de la persona. En efecto, el Ayuntamiento de Valencia interpone recurso de apelación contra la Sentencia núm. 226/13, de 13 de junio de 2013, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 10 de Valencia en el recurso contencioso-administrativo núm. 87/2013.

Los antecedentes son los siguientes: dos vecinos de Valencia interponen recurso contencioso-administrativo ante la desestimación por silencio administrativo de la reclamación que formularon ante el Ayuntamiento de Valencia con el fin de evitar los ruidos procedentes de verbenas durante las fallas.

El Juzgado estima el recurso: 1) anula la inactividad administrativa y la resolución impugnadas por no ser ajustadas a derecho; 2) declara vulnerados los derechos fundamentales a la intimidad e inviolabilidad del domicilio de los demandantes como consecuencia de las actuaciones municipales; y 3) condena a la Administración demandada a adoptar las medidas correspondientes para evitar la sucesiva vulneración de los derechos fundamentales citados, incluyendo la prohibición de la realización de la verbena en el año inmediatamente siguiente, esto es, las fallas del año 2014.

Ante el pronunciamiento, el Ayuntamiento de Valencia interpuso recurso en el que solicitaba la revocación de la sentencia impugnada.

Por otro lado, entre los razonamientos del Tribunal, en los fundamentos jurídicos se destaca que la contaminación acústica debe ser tenida muy en cuenta por sus repercusiones en derechos fundamentales, “de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional que declara expresamente que la vulneración de derechos fundamentales dimanante de la exposición continuada a niveles de ruido intensos puede tener lugar cuando, aun sin llegar a producirse el daño, exista un riesgo constatado de producción cierta o potencial justificado en el proceso, es decir, cuando se acredite un riesgo relevante de que la lesión puede llegar a producirse”. Así, estamos ante una actividad que afecta a diversos aspectos esenciales y dignos de la máxima protección jurídica — esto es: integridad física y moral, protección de la salud, disfrute de un medio ambiente adecuado e intimidad familiar y personal—, y así lo reconocen expresamente la jurisprudencia —recordemos las conocidas sentencias dictadas por el TEDH en los

casos López Ostra y Moreno Gómez contra el Reino de España— y la doctrina y la legislación, en este caso, la Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de Protección contra la Contaminación Acústica.

### **3. Declaración de impacto ambiental: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9545/2014, de 13 de noviembre, y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9568/2014, de 20 de noviembre**

Ambos pronunciamientos abordan la declaración de impacto ambiental (en adelante, DIA), un documento, recordemos, que pretende recoger el resultado de la evaluación de impacto ambiental y alegaciones de un proyecto, y que determina la conveniencia o no de realizar una determinada actividad, así como de establecer, si así procede, las condiciones para que la protección del medio ambiente y de los recursos naturales sea adecuada. En estos pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana principalmente se aborda la necesidad de conjugar el desarrollo urbanístico con la protección del medio ambiente, dos ámbitos durante mucho tiempo reñidos y contrapuestos, pero que ahora necesariamente deben entenderse de manera integrada bajo la premisa del principio de “desarrollo sostenible”.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9545/2014, de 13 de noviembre, se interpone recurso contencioso-administrativo frente a la Resolución del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià de 27 de julio de 2011, por el que se aprobó definitivamente el Plan Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir del PGOU de dicho municipio. Dicho Plan Parcial tenía por objeto establecer las determinaciones de planeamiento necesarias para la implantación en el sector de una iniciativa de carácter turístico-residencial con una superficie total de 1.675.579 m<sup>2</sup>, en su mayor parte incluida en el ámbito territorial del LIC denominado Serres de Bèrnia i el Ferrer y de la ZEPA Montañas de la Marina.

Dos son las alegaciones impugnatorias en que la demandante basa su pretensión de anulación del acuerdo recurrido:

— En primer lugar, la vulneración por el Ayuntamiento demandado del artículo 12 del RDL 1/2008, del artículo 5 de la Ley 2/1989, de la Generalitat, y del artículo 21.2 del Decreto 162/1990, dada la inexistencia de evaluación de impacto ambiental del Plan

Parcial aprobado. En relación con este motivo, debe destacarse que el Tribunal estima el recurso y, en consecuencia, señala que es necesario exigir la correspondiente DIA, sin necesidad de examinar las restantes cuestiones planteadas.

— En segundo lugar, la parte recurrente alegaba la infracción de los artículos 19.bis y 20 de la Ley 4/2000, de la Generalitat, al estar integrado el sector Anibits-Margequivir en la infraestructura verde de la Comunidad Valenciana y no incorporar el Plan Parcial ninguna medida de protección, ordenación, uso y gestión de esa infraestructura, cuestión que hemos advertido no llegó a ser valorada por el Tribunal.

En la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9568/2014, de 20 de noviembre, se resuelve el recurso contencioso planteado por la Federación Ecologistas en Acción del País Valenciano contra la Resolución del Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià de 27 de julio de 2011, publicada en el DOGV el 10 de agosto de 2011, por la que se aprobaba definitivamente el Plan Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir y su estudio de integración paisajística y contra la Resolución del director general de Gestión del Medio Natural de 3 de diciembre de 2004, publicada en fecha 16 de agosto de 2011, por la que se aprobaba la modificación de la declaración de impacto ambiental.

Las cuestiones principales y frente a las que se plantea el recurso son:

— La clasificación de suelo como urbanizable del llamado Sector 14, aprobado en el PGOU en 2006 y DIA del PGOU (2004) que justifica la clasificación como urbanizable del suelo del sector 14.

— La posterior aprobación del Plan Parcial del Sector 14, el 27 de julio de 2011 y el estudio de integración paisajística.

Por todo ello, el recurrente solicita la nulidad de la clasificación del suelo del Sector 14 como urbanizable y de la aprobación del Plan parcial de Sector 14.

En efecto, el señalado Sector 14 había sido considerado por la DIA del PGOU aprobada el 17 de marzo de 2004 como no urbanizable de especial protección, siendo suelo propuesto como LIC. No obstante, esa DIA fue matizada teniendo en cuenta las alegaciones del Ayuntamiento, de manera que se admitió la clasificación como suelo

urbanizable, condicionándose la modificación a una evaluación ambiental a realizar por la Conselleria de Territorio y Vivienda que garantizase la protección ambiental del entorno afectado por las actuaciones que se desarrollasen en el ámbito, en cumplimiento del Plan General.

En el PGOU aprobado en el año 2006, el Sector 14 formó parte de los suelos urbanizables, sin ordenación pormenorizada, con la determinación estructural de ser necesaria una evaluación de impacto ambiental.

El Tribunal entra a considerar si es ajustada o no a derecho la clasificación del suelo del Sector 14 como urbanizable, y destaca que para ello debe atenderse a los valores de este suelo y a las normas de derecho sustantivo que determinan que el suelo sea considerado suelo no urbanizable o suelo urbanizable. Y para ello, hace alusión a los datos obrantes en expediente que son los siguientes:

— La mayor parte del sector está incluida en la red Natura 2000, LIC Serres de Bèrnia i el Ferrer.

— Igualmente, la mayor parte del sector está incluido en el Inventario del Suelo Forestal, según el Informe de 23 de septiembre de 2005 del técnico de Demarcación Este de la Dirección Territorial de Alicante de la Conselleria de Territorio y Vivienda, en el expediente 2/1651/048 de aprobación del PGOU, en virtud del artículo 34 del Decreto 106/2004 del Plan General de Ordenación Forestal, quien concluye que, de acuerdo con el artículo 62, los nuevos planes de ordenación territorial, los planes generales y sus modificaciones establecerán clasificaciones urbanísticas que garanticen la protección por razones forestales de los terrenos clasificados como áreas de suelo forestal de protección y que resulta incompatible con el uso residencial pretendido, por lo que informa desfavorablemente.

A su vez considera el Tribunal que, respecto al LIC Serres de Bèrnia i el Ferrer, es cierto que la inclusión de los terrenos del Sector 14 no determina por sí misma la imposibilidad de actuar urbanísticamente sobre éste, si bien la Administración autonómica debió valorar las repercusiones sobre los hábitats protegidos.

En su fallo, en primer lugar, la Sala estima, parcialmente, el recurso indirecto interpuesto contra el PGOU de Callosa d'en Sarrià en lo referente a la clasificación de suelo urbanizable del Sector 14 Anibits-Margequivir, declarándola nula y dejándola sin efecto por la inexistencia de evaluación ambiental por parte de la Conselleria, que



garantice la protección ambiental del entorno afectado por las actuaciones que se desarrollen en el ámbito del Sector 14 calificado como urbanizable.

En segundo lugar, en cuanto a la nulidad del Plan Parcial, la estimación de la impugnación indirecta del PGOU respecto al Sector 14 bastaría para declararlo nulo; no obstante, la Sala considera necesario hacer las siguientes consideraciones:

— El 75% del Sector 14 está afectado por la declaración de LIC y ZEPA, es decir, las determinaciones medioambientales afectan a gran parte del sector.

—En el expediente de aprobación del Plan Parcial, el Estudio ambiental para la evaluación específica de repercusiones en los espacios de la red natura 2000 para el desarrollo urbanístico del sector Anibits- Margequivir -realizado en enero del 2009 por GEMAP- no evalúa las repercusiones del Plan Parcial sobre esta ZEPA, por lo que no cumple con la exigencias europeas sobre la materia.

—En el estudio de integración paisajística realizado en el año 2011, tampoco consta evaluación ambiental necesaria.

Por todo ello finalmente, el TSJ declara la nulidad, también, del Plan Parcial Sector 14 Anibitis-Margequivir.

#### **4. Disponibilidad de recursos hídricos: Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana 9593/2014, de 21 de noviembre.**

En los pronunciamientos del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, otro tema recurrente que tiene como fin la protección del medio ambiente es el referido a la necesidad de que exista informe positivo de la Confederación Hidrográfica sobre la disponibilidad de recursos hídricos.

Así, el recurso contencioso-administrativo presentado pretende la anulación de la Resolución del Conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de 5 de mayo de 2009, por la que definitivamente se aprueba la Homologación y el Plan Parcial del Sector “Lagunas de Rabasa”, del municipio de Alicante.

Esta resolución tiene unos antecedentes que es necesario conocer. En 1987 se aprobó el PGOU del municipio de Alicante. Posteriormente, en 2003 se presentó una documentación relativa a la propuesta de nuevo modelo territorial que afectaba a la zona

de Rabasa. El modelo se desarrolló a través del Programa de Actuación Integrada (PAI), en cuyo seno debía realizarse un estudio de impacto ambiental. El Ayuntamiento de Alicante finalmente adjudicó el PAI y aprobó provisionalmente el Documento de Homologación y el Plan Parcial del Sector Rabasa. Asimismo, aprobó el Programa de Actuación Integrada del Sector Rabasa.

Durante la tramitación autonómica, además de emitirse declaración de impacto ambiental, el 7 de mayo de 2007, por la Secretaría de Territorio y Medio Ambiente, se emitieron los oportunos informes, siendo desfavorables, entre otros, el del Ministerio de Medio Ambiente (Confederación Hidrográfica) en relación con la disponibilidad de recursos hídricos. Con todo, el día 5 de mayo de 2009 se aprobó definitivamente la Homologación y el Plan Parcial por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

La recurrente alega como causa determinante de la nulidad la ausencia de recursos hídricos suficientes para desarrollar una actuación de esta magnitud, con violación del artículo 25.4 del RDL 1/2001, de 20 de julio, y del artículo 19 de la Ley de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje. Esta cuestión, a la que nos hemos referido en otras crónicas, también ha sido tratada ampliamente por el Tribunal Supremo, siendo las principales conclusiones: el carácter preceptivo y vinculante del informe para los planes que supongan nuevas demandas de recursos hídricos; la necesidad de que este sea favorable, de manera que el informe negativo no permitiría la aprobación del plan; y el hecho de que, si la Confederación Hidrográfica no emite el informe en el plazo establecido, se entenderá que es desfavorable.

En 2006 la Confederación Hidrográfica emite informe desfavorable tanto en lo que se refiere al origen del agua como en lo relativo a su disponibilidad, ya que el Ayuntamiento no tiene la concesión necesaria para la explotación de los caudales. Por todo ello, el Tribunal estima el recurso, anulando las resoluciones y los acuerdos recurridos.

**Sumari:** 1. Prevalença de l'interès ambiental en l'adopció de mesures cautelars: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 553/2014, de 22 d'octubre, i Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 7628/2014, de 7 de novembre. 2. Contaminació acústica: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9657/2014, de 26 de novembre. 3. Declaració d'impacte ambiental: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9545/2014, de 13 de novembre, i Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9568/2014, de 20 de novembre. 4. Disponibilitat de recursos hídrics.: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9593/2014, de 21 de novembre.

Seguidament exposarem les sentències més rellevants que ha dictat el Tribunal Superior de Justícia per ordre cronològic, i les identificarem per la temàtica que s'hi tracta.

### **1. Prevalença de l'interès ambiental en l'adopció de mesures cautelars: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 7553/2014, de 22 d'octubre, i Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 7628/2014, de 7 de novembre**

En la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 7553/2014, de 22 d'octubre, l'objecte de recurs d'apel·lació és l'Acte de 13 de maig de 2013 dictat pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 1 d'Elx, en la peça de mesures cautelars del recurs contenciós-administratiu ordinari número 28/2013 seguit davant aquest jutjat, pel qual es denegava l'adopció de mesura cautelar de suspensió d'execució de l'acte administratiu impugnat, que era la Resolució de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Crevillent, desestimària del recurs de reposició interposat per aquesta mercantil contra la Resolució de l'Alcaldia que va ordenar, en l'expedient 1-81/2012, la restauració de la legalitat urbanística vulnerada, amb demolició de les obres il·legalment executades. Destaca el Tribunal que les mesures cautelars pretenen principalment salvaguardar que la futura sentència pugui ser complerta i que el seu pronunciament tingui un efecte útil, esbiaixant que es produeixin situacions irreversibles durant el temps que transcorri fins que recaigui un pronunciament judicial ferm. Sent necessari per adoptar la decisió cautelar la ponderació de l'interès públic que demanda l'execució, valorant-se els interessos en joc, tant els interessos públics com els de caràcter privat, així com el contrast entre els diversos interessos públics existents.

La peculiaritat d'aquest cas és que normalment la demolició s'ha vingut presentant com un dany de difícil reparació; no obstant això, el Tribunal considera, en una línia garantista amb la preservació del medi ambient, que "l'execució de l'al·ludida ordre de

restauració no fa perdre la seva finalitat legítima al recurs contenciós administratiu en cas d'estimar-se el mateix, doncs no impossibilita el compliment de la sentència en els seus propis termes amb mínvament del principi d'identitat, perquè, com en un supòsit similar té declarat la STS 3<sup>a</sup>, Secció 5<sup>a</sup>, de 22 de juliol de 2008 —recurs de cassació número 270/2007—, ‘Duta a terme la demolició, no hi ha dubte que, de prosperar l'acció exercitada pel recurrent en seu jurisdiccional, resultaria irrecuperable la mateixa edificació però no una altra d'iguals característiques’. Ha de tenir-se present en aquest punt, així mateix, que segons es diu expressament per la parteix apel·lant, en la nau en qüestió no s'exerceix cap activitat que hagi de cessar a conseqüència d'aquesta demolició”.

Així mateix, s'addueix un altre argument per sostenir la denegació de la mesura cautelar i és que, com hem assenyalat, és precisa la “valoració circumstanciada dels interessos en conflicte”. És obvi que en aquest cas la ubicació de la construcció il·legal en sòl no urbanitzable protegit, en concret en sòl classificat pel vigent Pla General de Crevillent com a sòl no urbanitzable protegit del Sistema de Zones Humides del Sud d'Alacant, determina que, enfront dels interessos particulars de la recurrent, hagi de prevaler l'interès general, consistent en la protecció d'aquest sòl, la protecció del qual es troba vinculada a la protecció del medi ambient. Sobre la base de l'anterior, el Tribunal desestima el recurs d'apel·lació presentat.

En aquest cas, la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 7628/2014, de 7 de novembre, resol el recurs d'apel·lació contra l'Acte número 352/2013, dictat amb data 26 de novembre de 2013 pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 2 de Castelló, en peça separada de mesures cautelars dimanant del recurs contenciós-administratiu número 294/2013, pel qual es denega als recurrents la mesura cautelar sol·licitada.

Inicialment, els recurrents havien interposat recurs contenciós-administratiu contra la Resolució de la Conselleria per la qual se'ls denegava l'autorització ambiental integrada per a la realització d'una activitat emparada en la Llei de Mines, sol·licitant-se, a més, en Altressí com a mesura cautelar la suspensió de l'execució dels actes recorreguts, això és, que es pogués seguir realitzant aquesta activitat en tant es resolvia el recurs, i per a això, d'acord amb la teoria general de les mesures cautelars, passaven a exposar els següents motius:

1) Concurrencia de l'aparença de bon dret, fonamentada la mateixa que els expedients s'havien tramitat sense haver seguit el procediment legalment establert, i també assenyalant la falta de motivació de la Resolució.

2) Pèrdua de la finalitat legítima del recurs, causant-se perjudicis d'impossible reparació.

3) Que la suspensió no suposaria perjudicis per a l'interès públic i que l'activitat ha afavorit la diversitat de l'ecosistema de l'aiguamoll.

El jutgador, davant les al·legacions anteriors, desestima l'adopció de mesures cautelars sobre la base del següent:

1) No s'especifiquen ni s'acrediten els possibles perjudicis de difícil reparació.

2) En segon lloc, posant de manifest la necessitat de prioritzar la protecció ambiental, entén el Tribunal que amb “la resolució administrativa objecte d'actuacions es pretén protegir un interès públic evident, com és el medi ambient, fent-se esment exprés en la resolució recorreguda que l'activitat extractiva al Prat de Cabanes-Torreblanca pot tenir efectes perjudicials sobre els valors protegits pel DIO, l'acord ZEPA, el Parc Natural i l'aiguamoll i es vulneraria la normativa de protecció ambiental”.

En relació amb la “aparença de bon dret”, segueix el Tribunal la línia jurisprudencial més recent, que suposa una aplicació estricta d'aquesta doctrina, utilitzant-la en els següents suposats taxats: nul·litat de ple dret, sempre que sigui manifesta; actes dictats en compliment o execució d'una disposició general declarada nul·la; existència d'una sentència que anul·la l'acte en una instància anterior encara que no sigui ferma; i existència d'un criteri reiterat de la jurisprudència enfront del que l'Administració oposa una resistència contumaz.

Sobre el perjudici que es causa als recurrents, de difícil reparació, destaca el Tribunal la seva naturalesa econòmica en tot cas, que comporta que, excepte supòsits excepcionals, no sigui motiu suficient per atorgar la mesura cautelar i més encara quan amb ella es pretén una protecció del mitjà natural.

## **2. Contaminació acústica: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9657/2014, de 26 de novembre**

Estem en aquest cas en un supòsit de procediment especial per a la protecció dels drets fonamentals de la persona. En efecte, l'Ajuntament de València interposa recurs

d'apel·lació contra la Sentència núm. 226/13, de 13 de juny de 2013, dictada pel Jutjat del Contenciós-Administratiu núm. 10 de València en el recurs contenciós-administratiu núm. 87/2013.

Els antecedents són els següents: dos veïns de València interposen recurs contenciós-administratiu davant la desestimació per silenci administratiu de la reclamació que van formular davant l'Ajuntament de València amb la finalitat d'evitar els sorolls procedents de revetlles durant les falles.

El Jutjat estima el recurs: 1) anul·la la inactivitat administrativa i la resolució impugnades per no ser ajustades a dret; 2) declara vulnerats els drets fonamentals a la intimitat i inviolabilitat del domicili dels demandants com a conseqüència de les actuacions municipals; i 3) condemna a l'Administració demandada a adoptar les mesures corresponents per evitar la successiva vulneració dels drets fonamentals citats, incloent la prohibició de la realització de la revetlla l'any immediatament següent, això és, les falles de l'any 2014.

Davant el pronunciament, l'Ajuntament de València va interposar recurs en el qual sol·licitava la revocació de la sentència impugnada.

D'altra banda, entre els raonaments del Tribunal, en els fonaments jurídics es destaca que la contaminació acústica ha de ser tinguda molt en compte per les seves repercussions en drets fonamentals, “de conformitat amb la doctrina del Tribunal Constitucional que declara expressament que la vulneració de drets fonamentals dimanant de l'exposició continuada a nivells de soroll intensos pot tenir lloc quan, àdhuc sense arribar a produir-se el dany, existeixi un risc constatat de producció certa o potencial justificat en el procés, és a dir, quan s'acrediti un risc rellevant que la lesió pot arribar a produir-se”. Així, estem davant una activitat que afecta a diversos aspectes essencials i dignes de la màxima protecció jurídica — això és: integritat física i moral, protecció de la salut, gaudi d'un medi ambient adequat i intimitat familiar i personal—, i així ho reconeixen expressament la jurisprudència —recordem les conegudes sentències dictades pel TEDH en els casos López Ostra i Moreno Gómez contra el Regne d'Espanya— i la doctrina i la legislació, en aquest cas, la Llei 7/2002, de 3 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Protecció contra la Contaminació Acústica.

### **3. Declaració d'impacte ambiental: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9545/2014, de 13 de novembre, i Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9568/2014, de 20 de novembre**

Tots dos pronunciaments aborden la declaració d'impacte ambiental (d'ara endavant, DIA), un document, recordem, que pretén recollir el resultat de l'avaluació d'impacte ambiental i al·legacions d'un projecte, i que determina la conveniència o no de realitzar una determinada activitat, així com d'establir, si així procedeix, les condicions perquè la protecció del medi ambient i dels recursos naturals sigui adequada. En aquests pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana principalment s'aborda la necessitat de conjugar el desenvolupament urbanístic amb la protecció del medi ambient, dos àmbits durant molt temps renyits i contraposats, però que ara necessàriament han d'entendre's de manera integrada sota la premissa del principi de “desenvolupament sostenible”.

En la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9545/2014, de 13 de novembre, s'interposa recurs contenciós-administratiu enfront de la Resolució de l'Acord del Ple de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià de 27 de juliol de 2011, pel qual es va aprovar definitivament el Pla Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir del PGOU d'aquest municipi. Aquest Pla Parcial tenia per objecte establir les determinacions de planejament necessàries per a la implantació en el sector d'una iniciativa de caràcter turístic-residencial amb una superfície total d'1.675.579 m<sup>2</sup>, en la seva major part inclosa en l'àmbit territorial del LIC denominat Serres de Bèrnia i el Ferrer i de la ZEPA Muntanyes de la Marina.

Dos són les al·legacions impugnatòries en què la demandant basa la seva pretensió d'anul·lació de l'acord recorregut:

— En primer lloc, la vulneració per l'Ajuntament demandat de l'article 12 del RDL 1/2008, de l'article 5 de la Llei 2/1989, de la Generalitat, i de l'article 21.2 del Decret 162/1990, donada la inexistència d'avaluació d'impacte ambiental del Pla Parcial aprovat. En relació amb aquest motiu, ha de destacar-se que el Tribunal estima el recurs i, en conseqüència, assenyala que és necessari exigir la corresponent DIA, sense necessitat d'examinar les restants qüestions plantejades.

— En segon lloc, la part recurrent al·legava la infracció dels articles 19. bis i 20 de la Llei 4/2000, de la Generalitat, en estar integrat el sector Anibits-Margequivir en la

infraestructura verda de la Comunitat Valenciana i no incorporar el Pla Parcial cap mesura de protecció, ordenació, ús i gestió d'aquesta infraestructura, qüestió que hem advertit no va arribar a ser valorada pel Tribunal.

En la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9568/2014, de 20 de novembre, es resol el recurs contenciós plantejat per la Federació Ecologistes en Acció del País Valencià contra la Resolució de l'Ajuntament de Callosa d'en Sarrià de 27 de juliol de 2011, publicada en el DOGV el 10 d'agost de 2011, per la qual s'aprovava definitivament el Pla Parcial del Sector 14 Anibits-Margequivir i el seu estudi d'integració paisatgística i contra la Resolució del director general de Gestió del Mitjà Natural de 3 de desembre de 2004, publicada en data 16 d'agost de 2011, per la qual s'aprovava la modificació de la declaració d'impacte ambiental. Les qüestions principals i enfront de les quals es planteja el recurs són:

- La classificació de sòl com a urbanitzable de l'anomenat Sector 14, aprovat en el PGOU en 2006 i DIA del PGOU (2004) que justifica la classificació com a urbanitzable del sòl del sector 14.
- La posterior aprovació del Pla Parcial del Sector 14, el 27 de juliol de 2011 i l'estudi d'integració paisatgística.

Per tot això, el recurrent sol·licita la nul·litat de la classificació del sòl del Sector 14 com a urbanitzable i de l'aprovació del Pla parcial de Sector 14.

En efecte, l'assenyalat Sector 14 havia estat considerat per la DIA del PGOU aprovada el 17 de març de 2004 com no urbanitzable d'especial protecció, sent sòl proposat com a Llic. No obstant això, aquesta DIA va ser matisada tenint en compte les al·legacions de l'Ajuntament, de manera que es va admetre la classificació com a sòl urbanitzable, condicionant-se la modificació a una avaluació ambiental a realitzar per la Conselleria de Territori i Habitatge que garantis la protecció ambiental de l'entorn afectat per les actuacions que es desenvolupessin en l'àmbit, en compliment del Pla General. En el PGOU aprovat l'any 2006, el Sector 14 va formar part dels sòls urbanitzables, sense ordenació detallada, amb la determinació estructural de ser necessària una avaluació d'impacte ambiental.

El Tribunal entra a considerar si és ajustada o no a dret la classificació del sòl del Sector 14 com a urbanitzable, i destaca que per a això ha d'atendre's als valors d'aquest sòl i a



les normes de dret substantiu que determinen que el sòl sigui considerat sòl no urbanitzable o sòl urbanitzable. I per a això, fa al·lusió a les dades obrants en expedient que són els següents:

— La major part del sector està inclosa a la xarxa Natura 2000, LIC Serres de Bèrnia i el Ferrer.

— Igualment, la major part del sector està inclòs en l'Inventari del Sòl Forestal, segons l'Informe de 23 de setembre de 2005 del tècnic de Demarcació Aquest de la Direcció territorial d'Alacant de la Conselleria de Territori i Habitatge, en l'expedient 2/1651/048 d'aprovació del PGOU, en virtut de l'article 34 del Decret 106/2004 del Pla General d'Ordenació Forestal, qui conclou que, d'acord amb l'article 62, els nous plans d'ordenació territorial, els plans generals i les seves modificacions establiran classificacions urbanístiques que garanteixin la protecció per raons forestals dels terrenys classificats com a àrees de sòl forestal de protecció i que resulta incompatible amb l'ús residencial pretès, per la qual cosa informa desfavorablement. Al seu torn considera el Tribunal que, respecte al LIC Serres de Bèrnia i el Ferrer, és cert que la inclusió dels terrenys del Sector 14 no determina per si mateixa la impossibilitat d'actuar urbanísticament sobre aquest, si bé l'Administració autonòmica va haver de valorar les repercussions sobre els hàbitats protegits.

En la seva fallada, en primer lloc, la Sala estima, parcialment, el recurs indirecte interposat contra el PGOU de Callosa d'en Sarrià referent a la classificació de sòl urbanitzable del Sector 14 Anibits-Margequivir, declarant-la nul·la i deixant-la sense efecte per la inexistència d'avaluació ambiental per part de la Conselleria, que garanteixi la protecció ambiental de l'entorn afectat per les actuacions que es desenvolupin en l'àmbit del Sector 14 qualificat com a urbanitzable.

En segon lloc, quant a la nul·litat del Pla Parcial, l'estimació de la impugnació indirecta del PGOU respecte al Sector 14 bastaria per declarar-ho nul; no obstant això, la Sala considera necessari fer les següents consideracions:

— El 75% del Sector 14 està afectat per la declaració de LIC i ZEPA, és a dir, les determinacions mediambientals afecten a gran part del sector.

— En l'expedient d'aprovació del Pla Parcial, l'Estudi ambiental per a l'avaluació específica de repercussions als espais de la xarxa natura 2000 per al desenvolupament urbanístic del sector Anibits- Margequivir -realitzat al gener del 2009 per GEMAP- no

avalua les repercussions del Pla Parcial sobre aquesta ZEPA, per la qual cosa no compleix amb l'exigències europees sobre la matèria

—En l'estudi d'integració paisatgística realitzat l'any 2011, tampoc consta avaluació ambiental necessària.

Per tot això finalment, el TSJ declara la nul·litat, també, del Pla Parcial Sector 14 Anibitis-Margequivir

#### **4. Disponibilitat de recursos hídrics: Sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana 9593/2014, de 21 de novembre**

En els pronunciaments del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, un altre tema recurrent que té com a fi la protecció del medi ambient és el referit a la necessitat que existeixi informe positiu de la Confederació Hidrogràfica sobre la disponibilitat de recursos hídrics.

Així, el recurs contenciós-administratiu presentat pretén l'anul·lació de la Resolució del Conseller de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge de 5 de maig de 2009, per la qual definitivament s'aprova l'Homologació i el Pla Parcial del Sector “Llacunes de Rabasa”, del municipi d'Alacant.

Aquesta resolució té uns antecedents que és necessari conèixer. En 1987 es va aprovar el PGOU del municipi d'Alacant. Posteriorment, en 2003 es va presentar una documentació relativa a la proposta de nou model territorial que afectava a la zona de Rabasa. El model es va desenvolupar a través del Programa d'Actuació Integrada (PAI), en el si del qual havia de realitzar-se un estudi d'impacte ambiental. L'Ajuntament d'Alacant finalment va adjudicar el PAI i va aprovar provisionalment el Document d'Homologació i el Pla Parcial del Sector Rabasa. Així mateix, va aprovar el Programa d'Actuació Integrada del Sector Rabasa.

Durant la tramitació autonòmica, a més d'emetre's declaració d'impacte ambiental, el 7 de maig de 2007, per la Secretaria de Territori i Medi ambient, es van emetre els oportuns informes, sent desfavorables, entre uns altres, el del Ministeri de Medi ambient (Confederació Hidrogràfica) en relació amb la disponibilitat de recursos hídrics. Amb tot, el dia 5 de maig de 2009 es va aprovar definitivament l'Homologació i el Pla Parcial per la Conselleria de Medi ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge.

La recurrent al·lega com a causa determinant de la nul·litat l'absència de recursos hídrics suficients per desenvolupar una actuació d'aquesta magnitud, amb violació de l'article 25.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, i de l'article 19 de la Llei d'Ordenació del Territori i Protecció del Paisatge. Aquesta qüestió, a la qual ens hem referit en altres cròniques, també ha estat tractada àmpliament pel Tribunal Suprem, sent les principals conclusions: el caràcter preceptiu i vinculant de l'informe per als plans que suposin noves demandes de recursos hídrics; la necessitat que aquest sigui favorable, de manera que l'informe negatiu no permetria l'aprovació del pla; i el fet que, si la Confederació Hidrogràfica no emet l'informe en el termini establert, s'entendrà que és desfavorable. En 2006 la Confederació Hidrogràfica emet informe desfavorable tant pel que fa a l'origen de l'aigua com quant a la seva disponibilitat, ja que l'Ajuntament no té la concessió necessària per a l'explotació dels cabals. Per tot això, el Tribunal estima el recurs, anul·lant les resolucions i els acords recorreguts.